



Columna



Ricardo Alt Hayal,  
periodista

## Región de Los Lagos y la basura bajo la alfombra

**E**n mayo de 2019, un reportaje del diario El Llanquihue, basado en un informe de la empresa Proambiental, reveló que apenas dos de 17 centros de acopio de desperdicios en la región de Los Lagos contaban con Resolución de Calificación Ambiental (RCA). La reacción en términos de declaraciones parecía entender la problemática, pero en los hechos no ocurrió absolutamente nada.

Casi cuatro años después, en enero de 2023, el mismo medio publicó una segunda versión del estudio, señalando que la situación era aún peor.

El informe del año pasado retrató que en la región se generan un millón de toneladas anuales de residuos: 368 mil toneladas son domiciliarios, 615 mil industriales y 10 mil peligrosos. Estos se tratan o disponen en 15 sitios, de los cuales sólo dos fueron sometidos a procesos de evaluación ambiental y sanitaria antes de su inicio de operaciones. Ocho cuentan con planes de cierre y otros cuatro de-

**“Ejemplos como el el vertedero de Curaco, en Osorno, que ya cumplió con creces su vida útil, pero no se cierra para no agravar la crisis, son vergonzosos”.**

bieron haber cesado su operación. No es sorprendente que la gran mayoría haya enfrentado procesos de sanción y fiscalización.

La manoseada economía circular y el reciclaje no logran hacerse cargo de los desechos de la región. Por ello, el diagnóstico de 2022 calificó la situación como una vulnerabilidad medioambiental. No obstante, como en 2019, la basura expuesta volvió a ser dejada bajo la alfombra.

El círculo vicioso crece, porque la falta de oferta para resolver la mayor parte del problema, generada por los residuos industriales, presiona aún más las deficientes operaciones de los sitios municipales. Ejemplos como el megacolapsado vertedero de Curaco, en Osorno, que ya cumplió con creces su vida útil, pero no se cierra para no agravar la crisis, son vergonzosos. Ancud, por su parte, manda sus camiones con desechos a la ciudad de Los Ángeles, a un costo gigantesco.

Es correcto que las autoridades se pongan del lado de las comunidades para exigir que los proyectos de este tipo cumplan con toda la normativa ambiental antes de su aprobación. Lo que no es correcto es que no pongan el mismo ímpetu para enfrentar la gran vulnerabilidad medioambiental, aportando a la solución que debe venir de la mano de inversiones a gran escala en el tratamiento y disposición final de residuos, tanto domiciliarios como industriales.